



Grupo de estudio de las  
Transformaciones de la  
economía mundial



## La carta del GETEM: Especial Pandemia del COVID 19. Abril de 2020

Este número especial incluye dos aportaciones, que son **En tiempo del Coronavirus** de José Manuel García de la Cruz y **Salud, económica y política** pública de David Matesanz Gómez. Se recomienda la lectura de la carta número 10: **El papel de las ciencias sociales en las políticas públicas** de Javier Lucena Gilrado.

### EN TIEMPO DE CORONAVIRUS, por José Manuel García de la Cruz

*"Las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando aciertan como cuando se equivocan, son más poderosas de lo que se cree habitualmente. De hecho, poco más es lo que gobierna el mundo"*  
John Maynard Keynes

La urgencia por analizar los efectos de la pandemia del coronavirus y la necesidad de dar esperanza al futuro económico de la sociedad mundial están generando todo tipo de análisis y propuestas. Unas con mejor intención, otras con indisimulado egoísmo y otras, las más sinceras, con enorme desconcierto. Me sumo a estas últimas.

Empiezo por tratar de aclararme frente a algunas afirmaciones muy generalizadas.

1. "La situación es nueva". No lo creo. No hace falta ir a la Edad Media ni a la gripe española; en los últimos años, la humanidad ha conocido varias pandemias. Desde el sida hasta la última peste porcina o el ébola. (No soy científico y con estos nombres todos nos entendemos).
2. "Es una crisis de demanda" ¿o de oferta? No es una crisis, es un desplome de la actividad. Es como si en un tendido eléctrico se cortara el cable: la central de generación sigue funcionando, el tendido de distribución está instalado y el consumidor está esperando que vuelva la luz.
3. "Se va a destruir la estructura productiva". Pues no, las empresas no se van a destruir, las máquinas permanecen y el saber hacer las cosas también. Además ¿no estamos en la economía del conocimiento?
4. "Van a desaparecer muchas empresas". Seguro: todas las que iban a desaparecer en pocos años, si hacemos caso, si no a las cifras, sí a las alarmas señaladas por diversos estudios de la

Universidad de Oxford y otras, como las de Lovaina, Utrecht y otras, incluso de la OCDE y de la OIT.

5. "Se van a destruir millones de empleos". Ciertamente, porque lo es igualmente que desaparecerán empresas.
6. "La solución de la crisis no puede ser incrementar enormemente la deuda". Ciertamente, si la deuda hay que pagarla puede llegar a ser una carga que bloquee el futuro que se desea mejorar.
7. "Hay que recuperar los servicios públicos y la idea de bienestar colectivo". Ciertamente, los problemas de todos deben ser resueltos por todos.
8. "Hay que garantizar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan". Claro, de otra forma, nadie las defendería, salvo quienes esperan apropiárselas.
9. "Hay que generalizar las exenciones fiscales mientras dure la crisis". Habría que admitir las exenciones a quienes demuestren que han sido duramente afectados o, tal vez, no se han beneficiado durante la crisis.
10. "Los mercados (de valores) son indicadores de las expectativas". Hay que reconocer que sí están siendo indicadores de las oportunidades de beneficio de las ayudas públicas.
11. "Los economistas predicen". ¿No estamos ante una situación nueva? No se puede predecir. Pero, al fin y al cabo, siempre se especula.

¿Qué nos indican estas afirmaciones? Que seguimos pensando como si nada hubiera pasado. Por eso, y sin pretender dar respuestas ni necesariamente ciertas ni correctas, hay que empezar a revisar algunas ideas sólidamente establecidas en el pensamiento de los economistas. Empezaremos por algunas instituciones claves, definitorias, del sistema capitalista.

En pocos días nos hemos dado cuenta de que el mercado no informa bien de las necesidades. Esto choca con las ideas de Von Mises y Hayek, que legitimaban el mercado como gran mecanismo de coordinación de las decisiones de los actores económicos, siendo los precios el más precioso sistema de información. Ocultando que en el mercado solo pueden participar los que tienen algo que ofrecer: dinero, mercancías o trabajo. De aquí se desprende que proveer de dinero a todos los que tras la pandemia se puedan quedar excluidos del mercado no es sino una exigencia de la propia economía de mercado. Y por mucho tiempo.

Además, se ha roto el supuesto automatismo de las respuestas en el mercado reforzadas por los sistemas de producción *just in time*. Los costes de información sobre las necesidades se han mostrado elevadísimos y los de la respuesta desde la oferta también. La consolidación de las cadenas globales de producción y valor no ha sido

capaz de atender a la emergencia. El tiempo y la geografía, habitualmente marginados en la interpretación de los fenómenos económicos, se han colocado en el centro de la acción.

No solamente el mercado: la otra gran institución del sistema capitalista, la propiedad privada, también está tocada. No es ninguna novedad que desde la iniciativa privada se vienen proponiendo modelos de gestión corporativa socialmente responsable que aceptan la cooperación con el Estado bajo diversas fórmulas de alianzas público-privadas. No obstante, la propiedad privada como derecho natural está enormemente cuestionada. Por la propia dinámica competitiva y por los nulos avances en la equidad. Los avances tecnológicos, con su enorme impacto sobre las capacidades productivas instaladas, se ven como una amenaza para el mantenimiento del empleo, muy en la línea señalada por Schumpeter y su "destrucción creativa"; en otros términos, pueden llegar a romper la cohesión social. Por otra parte, la globalización ha ido mostrando sus limitaciones ante la ampliación de las desigualdades a escala mundial, como Piketty, Milanovic y muchos otros nos han explicado. No hay que olvidar que la desigualdad se manifiesta, sobre todo, en las diferencias en la posesión de derechos de propiedad, en propiedades.

Sería auténticamente un desastre que la economía informal fuera el horizonte para la mitad de los trabajadores y empresarios arruinados, que ya lo es en buena parte de las economías mundiales. Además, así no se recuperaría la economía, se mantendría en un estado de depresión permanente. Basta con recordar las ideas simples de la identidad entre producción, renta y gasto social del flujo circular de la renta para verlo con claridad: quienes participan en la producción (producto social) obtienen unas rentas (renta social) que gastan en la compra de lo producido (gasto social). En un gráfico se expresa como un flujo circular en el que los actores intercambian esfuerzo por dinero (renta) y producen mercancías en la fábrica (producto), la producción se lleva al mercado y allí se vende a las familias (gasto). El riesgo de un equilibrio a bajo nivel, en el que una parte de la sociedad mantenga su posición previa y el resto quede excluido, es enorme.

Hay más: no tienen razón quienes dicen que estamos ante una crisis simétrica porque nos afecta a todos. ¿Seguro? No es ni simétrica ni asimétrica, no hay países que ganen y países que pierden, sectores ganadores y perdedores, ricos y pobres; hay empresas con solidez financiera antes, durante y después, y empresas siempre pendientes de la renovación de las líneas de crédito. Hay empresas sólidas y empresas recién creadas, incluso innovadoras, que todavía no han conseguido un circulante sostenido. El riesgo de concentración empresarial es muy fuerte. La oligopolización se puede acentuar. Habrá

que potenciar las políticas de competencia y supervisión del mercado e incentivar que las pequeñas se agrupen creando medianas empresas. No entro en las consecuencias sobre la cohesión social ni en la respuesta política.

No solamente han fallado los mercados nacionales sino también el gran mercado mundial. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que China, en medio de su epidemia, podría estar dispuesta a vender equipos a los extranjeros? Solo desde la arrogancia de una supuesta racionalidad del beneficio a corto plazo se puede mantener la idea, tan arraigada, de que no hay que producir lo que se encuentre más barato en el mercado exterior.

Tampoco han respondido las áreas de integración regional. No basta con señalar, como se ha dicho en la Unión Europea, que la política sanitaria no está entre sus competencias; la circulación de mercancías se ha cuestionado, la de los servicios sanitarios, también, y, en el caso europeo, se ha suspendido el acuerdo Schengen sobre libre circulación de personas. Además, la escasa ambición de su presupuesto ha hecho inviable cualquier medida de urgencia. Solo el Banco Central Europeo ha respondido, con lo que tiene: dinero.

Los europeos, que nunca abandonaron la protección de su agricultura, ¿cómo es posible que hayan descuidado así la protección de la salud? Quizá la respuesta esté en que la agricultura europea se apoya en millones de agricultores/votantes y la salud en pocos oligopolios. Y quizá la respuesta venga de un fondo común con recursos limitados.

Hay que reinventar la economía pública, definir mejor el papel del Estado. El Estado keynesiano incorporó entre los objetivos de su acción el crecimiento inclusivo socialmente, lo que hacía necesario tratar de evitar las crisis económicas manteniendo un crecimiento estable, en un contexto internacional en el que las relaciones económicas internacionales estaban reguladas por amplios acuerdos monetarios, comerciales o sobre los movimientos de capitales. La globalización ha priorizado como objetivo la competitividad, apoyada no en mercados nacionales sino internacionales. Los viejos objetivos anteriores se someten a esta exigencia; más aún, la reputación de la política económica no se hace a partir de sus resultados para los ciudadanos de cada país, sino en términos de funcionamiento del mercado "libre". Los informes del World Economic Forum o el Doing Business del Banco Mundial son un ejemplo inmediato y extraordinario de esto.

Si el Estado keynesiano se tornó en Estado de bienestar, ¿quién vela por un Estado de bienestar a nivel mundial? No se ha prestado atención a la necesidad de proveer de bienes públicos globales. Resulta paradójico que, si bien se han aceptado las fallas de mercado en los

ámbitos nacionales, se hayan ignorado en el mercado global, que cabría esperar que ofreciera las mismas debilidades y, por lo tanto, los mismos riesgos para el funcionamiento y legitimación del propio mercado. Esta situación es una muestra más del escaso interés de los economistas por revisar sus ideas sobre la capacidad autorreguladora de los mercados, por más crisis de todo tipo que vayamos sufriendo. Nadie se reconoce en Polanyi y, solo ahora, nos volvemos a acordar de Keynes, coetáneos en la década de los treinta de la centuria pasada. Este no es el único problema, sino que el sectarismo se instaló en la academia.

Es un ejercicio sano reconocer que la teoría económica, tan rica en aportaciones a la solución de problemas muy concretos, ha fallado en ofrecer una respuesta teórica a situaciones como la que nos está afectando como consecuencia de la pandemia. Seguramente porque hasta hoy no ha afectado a los países "adelantados". No basta con proclamar que se han de gestionar óptimamente recursos para satisfacer necesidades, si entre estas no se ofrecen soluciones a la más básica: la salud. Situada por Maslow justo encima de las necesidades fisiológicas.

Hemos visto cómo durante las crisis financieras se han desembolsado enormes sumas de dinero para salvar el sistema financiero, erigido en la columna vertebral de la globalización. Hoy, ante la pandemia que nos afecta, se apoyan, incluso desde el FMI, las ayudas directas a las empresas para sostener su actividad y el empleo. Nadie pregunta por el riesgo empresarial. No es momento, pero si hay que salvar la propiedad privada habrá que demandar responsabilidad social a los ayudados más allá del empleo. Porque el empleo se puede salvar con expropiaciones de empresas, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero tampoco es el momento de plantearlo, aunque algunas aerolíneas parecen demandarlo, claro que por tiempo limitado. Pero sí habrá que condicionar las ayudas a su uso responsable y a la rendición de cuentas, no solo a los accionistas sino a la sociedad, que es la que colectivamente contribuye a las ayudas. De otra forma, la mayoría social se podría rebelar. Pero no quiero entrar en política.

La política económica –pública– debe actuar simultáneamente sobre la demanda y sobre la oferta para dinamizar el mercado, la actividad, el empleo y acelerar la recuperación, y así lo reconocen todos los organismos y así está actuando el gobierno de España. Las polémicas están en los detalles. Además, atender a tanto necesitado y a tanto pedigüeño es muy complicado.

Esta política va a tener también mucha repercusión sobre los propios instrumentos a emplear. Así, la expansión monetaria no puede

estancarse en la caja de los bancos –privados o públicos–, como sucedió con los préstamos del BCE en la anterior crisis financiera; debe llegar rápidamente a las familias y a las empresas. De ahí la importancia del famoso “helicóptero de Friedman” –dar dinero directamente a la gente–, puesto en marcha por Trump. Sin llegar a tanto –nos echaríamos a las calles a ver si cae algo–, el aplazamiento del pago de impuestos, no la cancelación, puede ser una solución de emergencia.

Ante las limitaciones operativas de la banca, habría que incluir a otros organismos no bancarios en esta tarea de distribución de dinero. Quizá las organizaciones empresariales, de autónomos y sindicales podrían facilitar información exacta de las necesidades y necesitados; incluso organizaciones privadas de asistencia social, desde Cruz Roja hasta Save the Children, porque no habría que ayudar solo a los ahora afectados, también habría que integrar a los excluidos. Se podrían crear cajas administradas o dirigidas, por ejemplo, por Economistas del Estado o Interventores (se hizo con los equipos de fútbol), dotadas de recursos bien definidos, procedimientos claros y rápidos, y con exigencia de redición de cuentas. Por cierto, ya se cuenta con instituciones como la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) o el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), ejemplos de innovación pública.

Surge la polémica: los fariseos de la estabilidad ya anuncian los males de la hiperinflación. Tras una etapa en la que un 2% de crecimiento de los precios anuales parecía que era suficientemente motivadora de la ilusión monetaria, llegó la preocupación porque la no inflación no motivaba la inversión. Ahora, cuando todo está hundido, nos debemos de preocupar por la hiperinflación (¿Qué es? ¿El 8%, el 13%, el 75%? ¿Anual, mensual, ...?). Esto no quiere decir que no sea un riesgo que atender, pero si la oferta reacciona a la demanda, el riesgo de inflación será transitorio. Se nos recuerda la situación de la Alemania ocupada después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cuál fue la inflación en Francia o en el Reino Unido, o en los Estados Unidos?

Por cierto, las enormes sumas de dinero negro de origen delictivo que circulan por el mundo rara vez han sido motivo de especial preocupación.

Hay otro riesgo: que las ideas de la teoría monetaria moderna, o al menos algunos de sus postulados, especialmente el relacionado con la financiación directa del gasto público, se abran paso entre la opinión pública. Al fin y al cabo, si el dinero es un bien público (aunque sea un poco especial, todos tenemos derecho a su disfrute), ¿por qué no producir dinero y evitar su escasez? (Es lo que, de nuevo, el BCE va a

hacer). El papel de los bancos se diluiría y el mundo de las finanzas se transformaría radicalmente. No sé si para bien o para mal. Como siempre, como sucedió con las ideas de Roosevelt y de Keynes, no fue el análisis riguroso lo que justificó la intervención del Estado, sino la necesidad. La urgencia, en un caso, y la desconfianza en las ideas de la época, en otro, permitieron el cambio.

Otro tanto pasará con los impuestos. ¿Se va a seguir pensando que bajar impuestos es moderno y descuidar lo público anticuado? Si antes de la pandemia se había iniciado el debate en torno a la necesidad de reconsiderar las figuras y los tipos impositivos ante los movimientos de capitales, las oportunidades para eludir la ley encontradas por las empresas tecnológicas o por las urgencias que el cambio climático plantea, habrá que incorporar la necesidad de fortalecer a la sociedad frente al nuevo riesgo. La pandemia, como el cambio climático, nos recuerda que nadie está a salvo; ni siquiera el mejor de los seguros privados. Esta "externalidad negativa" no pregunta por la cuenta corriente.

El Estado de bienestar tendrá que ser nuevamente definido y por supuesto mejorar su gestión, evitando las diferencias existentes según lugar de residencia. Hasta el propio de Guindos se sorprendió al escucharse decir que una renta básica podría ser una solución al desplome de la demanda. Cierto es que, en cuanto pudo, subrayó que con carácter temporal. Sin duda, esto supondría una transformación radical del sistema económico, pero podría servir para resolver algún otro problema, como la ampliación de la desigualdad. Hay que recordar que la propuesta de renta básica no es uniforme y, de hecho, sigilosamente, se va extendiendo en nuestra sociedad. En el País Vasco funciona un modelo bastante avanzado de renta garantía de ingresos cuidadosamente ignorado por los demás.

También las políticas sociales deben volver a incorporar con intensidad la solución al problema de la vivienda. Impulsar la construcción de viviendas sociales sería una medida de empuje a la inversión y a la demanda de gran impacto económico y social. Igual que hay una ley sobre límite de gasto, debería haber una ley que limite la reducción de ingresos públicos hasta que determinadas necesidades básicas no estén mínimamente cubiertas. ¿Estamos dispuestos a encontrar otra vez sin saber qué hacer con la gente sin hogar o que ocupa infraviviendas?

En definitiva, se trata de no aceptar que la reconstrucción económica sea la recuperación de lo que existía antes del desplome. ¿No habría que construir algo que no reproduzca los errores anteriores?

## **SALUD, ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA** **por David Matesanz Gómez**

5 de abril de 2020

Mucho se ha escrito sobre los efectos de la pandemia del COVID-19, tanto sobre la salud de la población, y los sistemas de salud, como sobre la economía. Los datos que vamos observando son, cuando menos, preocupantes y, en algunos casos, francamente desgarradores. Hoy, medio planeta está confinado en sus casas tratando de contener la expansión de este escurridizo virus, mientras los servicios de salud de algunos países, especialmente en el sur de Europa en el momento actual, asisten al progresivo colapso de sus capacidades y al no tan lento goteo de fallecimientos, aunque también de personas recuperadas de la enfermedad. Debido a las políticas de aislamiento social llevadas a cabo en multitud de países, tanto desarrollados como en desarrollo, la actividad económica se desploma y, con ella, aumentan sin remisión los números de profesionales y trabajadores que dejan de su actividad. Algunas empresas, por su parte, enfrentan serias dudas sobre su supervivencia futura, especialmente si la pandemia tiene una duración larga. La actual situación en nuestro país, España, de prohibición total de la movilidad, salvo para actividades llamadas esenciales, no hará sino profundizar esta situación.

En este contexto, señalado brevemente pues la mayoría de nosotros estamos más o menos al tanto del mismo, hay diversos debates todavía muy vivos y, también, diversos consensos. El objetivo de esta carta a este respecto es, simplemente, señalar estos debates/consensos en el momento actual. Consciente de que el momento actual deja de serlo en cuestión de días, vayamos por estos últimos, los consensos, en la relación entre salud y economía.

El primero de ellos es que la salud está por encima de la economía y hay que hacer, desde la política pública, todo lo posible por los enfermos del virus a pesar del ingente coste que supone, tanto del gasto sanitario como de los efectos económicos del intento de contener la expansión de la enfermedad. ¿Existe este consenso? En los lugares en "incendio" en el momento actual, España e Italia en Europa los focos más calientes, este consenso es claro. Sin embargo, observamos países y/o regiones donde esta visión no está asentada y, consecuentemente, las actuaciones públicas están siendo, por decirlo de alguna manera, tibias. A medida que han ido pasando los días, y los números de contagiados y fallecidos ha aumentado, la retórica del "no es para tanto" de algunos actores internacionales ha ido disminuyendo cuando no, Estados Unidos por ejemplo, ha virado hacia un mayor

compromiso con la gravedad de la enfermedad y la necesidad de su contención. En este consenso, también llama la atención la comparación entre los extremos del confinamiento de algunos países, España por ejemplo, donde las limitaciones son máximas frente a otros países donde se transfiere más responsabilidad a la sociedad y, consecuentemente, más permisividad en la cuarentena.

El segundo consenso, el orden que estoy estableciendo no implica mayor o menor importancia, se basa en la idea de que, en esta ocasión, la crisis de salud y económica no tiene "culpables": estamos todos en el mismo barco. Así como en la crisis financiera global de 2008-2009 el centro de la misma estuvo en un sector, el financiero, escasamente regulado y muy globalizado y ciertamente bastante desvinculado de su objetivo primigenio (canalizar el ahorro hacia las oportunidades de inversión productiva), en este momento el COVID-19 se ha extendido por regiones y países y no para en mientes en lo relativo a quién golpea. Así, la actuación de la política debería ser lo más global, o general, posible, intentando afrontar la pandemia en toda su magnitud sin mirar de reojo a quién está afectando. En nuestro caso, el proyecto de integración europeo al que pertenecemos representa el ámbito de decisión más global. De nuevo, me asalta la misma pregunta, ¿existe de verdad este consenso? Si escuchamos o leemos algunas declaraciones provenientes de algunos países de centro Europa, hablo de Holanda por ejemplo, nos damos cuenta que el runrún de la cigarra, cantadora y perezosa, del sur de Europa sigue actuando como excusa frente a este, supuesto, consenso. Veremos, esta semana probablemente, si la Unión Europea es capaz de ofrecer solidaridad en la magnitud que esta "interrupción parcial de nuestra vida" supone. Y, en realidad, no solo solidaridad sino interés mutuo. Al fin y al cabo somos un mercado común, tanto para consumidores como para productores.

Un consenso más: la pandemia está provocando un enorme choque, tanto de demanda como de oferta, en la economía nacional y global. La demanda de consumo se desploma por el confinamiento y el cierre de actividades económicas. Por supuesto, cualquier inversión no relacionada con los sectores esenciales queda, esperamos, pospuesta, si no directamente cancelada. El sector exterior, si ya venía anémico en el último par de años al menos, entra en una fase de desplome sin precedentes. Como siempre en épocas de crisis, solo nos queda al sector público como consumidor e inversor, aunque en esta etapa con estas capacidades teóricamente debilitadas por el punto de partida de muy la alta deuda pública que, especialmente pero no solo, tienen los países desarrollados. Por el lado de la oferta, la ruptura de las cadenas de valor globales implica e implicará una desestructuración de los flujos

de comercio e inversión globales que ya veremos cómo y cuándo se recomponen. En esta ocasión, yo al menos, no tengo ni conozco dudas acerca de este consenso salvo algunas voces, en Estados Unidos o Brasil por ejemplo, que reclaman que la orquesta siga tocando como si todo fuera normal. Aunque, es cierto, estas llamadas cada vez flotan con menos brío y más sordina.

Como consecuencia del avance y la gravedad de la pandemia, y de algunos de los aspectos señalados previamente, hay un consenso adicional en la absoluta transcendencia, en nuestro devenir económico y de los efectos de la pandemia en la población, del papel que jueguen los sectores públicos y, obviamente, en lo relacionado a las políticas que implementen. De nuevo el "Estado" toma las riendas, Keynes y la política económica del periodo de post guerra vuelve para intentar contener la sangría económica y no económica. Sin embargo, aquí sigue en pie, de momento, un debate interesante. Una vez aceptado prácticamente por todos que el libre mercado, con sus recetas de política para solucionar los llamados fallos de mercado y poco más, es incapaz de enfrentar este choque brutal a nuestra forma de vida, nuestro funcionamiento social y económico y, también, nuestros miedos e incertidumbres de cara al futuro, una vez aceptado esto, decía, el debate es sobre cómo debe ser la intervención pública, qué objetivos y magnitud debe tener y cómo se debe implementar.

Quisiera destacar y poner encima de la mesa tres aspectos.

La retórica usada durante esta pandemia tiene tintes marcadamente bélicos: nuestra batalla/guerra contra el coronavirus, vencer al COVID-19, etcétera. En este escenario pues hay un cierto debate en el rol que podría adoptar el gobierno, el Estado. En este sentido, ¿debe el sector público ubicarse en una política de guerra planificando parte de la actividad productiva y de servicios y, también, de la investigación? O bien, ceñirse a su rol de estabilizador de la economía para tratar de contrarrestar este choque de oferta y demanda usando, para ello, los medios fiscales y monetarios a su disposición, así como otros más relacionados con nuestros derechos y libertades. ¿Estaría preparado el sector público para asumir, hoy, ese rol de planificador disponiendo de información suficiente y fiable para ello? Docenas de otras preguntas como esta surgen pero, en todo caso, lo relevante en el debate es qué tipo de política podemos esperar que funcione mejor. Hasta el momento la mayor parte de las iniciativas públicas van en línea con la visión más keynesiana de atenuar el desplome de la actividad, sin embargo, actores centrales como los Estados Unidos, Trump de nuevo, se plantean invocar leyes que les puedan permitir intinar a las empresas privadas a producir determinados tipos de bienes y servicios. Otro debate interesante, en España aparentemente poco activo,

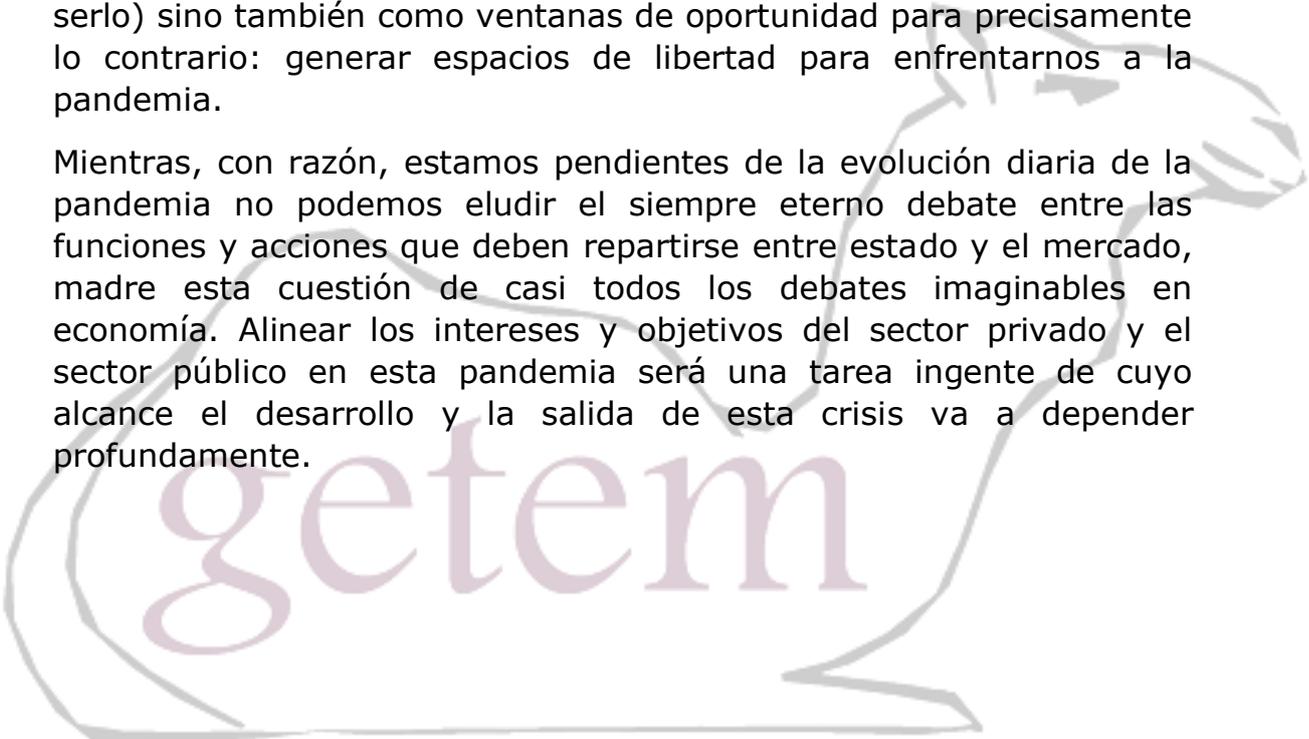
respecto de los espacios del Estado es el conflicto existente entre las medidas tomadas, especialmente en relación a la forma que han adoptado las medidas de distanciamiento social, y las libertades individuales, puesto el conflicto en la perspectiva de lo que sabemos hoy de la forma de expansión del covid-19. Sin embargo, no es este el objetivo de esta carta.

Otro debate interesante, especialmente relacionado con la expansión territorial de la pandemia, se refiere a la pauta temporal de implementación de las políticas aplicadas a distintos países/regiones. Uno de los graves problemas de la crisis financiera global de 2008 fue la extrema sincronía del evento, al menos en los países desarrollados. En esas condiciones, la coordinación en las intervenciones fiscales y monetarias era de suma importancia especialmente para que unos países no se aprovecharan de los impulsos de otros. Sin embargo, en la pandemia actual observamos diferentes ritmos en su evolución, tanto entre países como dentro de los mismos. Ésta, desde mi punto de vista, es una oportunidad en el ámbito de los efectos económicos y sociales de esta pandemia. Siempre que seamos capaces de controlar los flujos de personas entre países y regiones, para evitar la expansión de zonas con mayor difusión del virus a aquellas donde éste ha empezado a remitir su infección global, o su expansión inicial fue menor, la actividad económica podría tratar de ser modulada con el objetivo de no paralizar completamente los sectores productivos llamados en estas circunstancias no esenciales. La posibilidad existe y la hemos visto implementar en Asia.

Una profunda preocupación adicional, aunque creo que todavía no forma parte del debate general, es la posibilidad de que otra oleada del COVID-19 nos pueda golpear en un futuro no muy lejano. Algunos epidemiólogos lo dan por descontado. En este sentido, mirar lejos en los aspectos del debate que he señalado en los párrafos anteriores será central para enfrentar esa posibilidad. Es difícil, por supuesto, con las bofetadas diarias que nos impone la realidad que vamos conociendo dedicar esfuerzos y recursos a este quizá. Sin embargo, es una tarea importante porque si ese momento llegara deberíamos estar preparados para enfrentar un nuevo shock económico y social. Una cuestión adicional en este sentido, es la necesidad de información en tiempo real sobre la evolución de la pandemia, tanto para el sector salud como para cada ciudadano. A día de hoy, en muchos países, incluido España, por el lado del comportamiento de los ciudadanos, se está enfrentando la pandemia prácticamente como en la época de la peste negra en el siglo XIV. Aparte de la excelente información sobre cómo lavarnos y actuar sanitariamente contra el virus la única regla que tenemos es: no salgas de casa. Si la pandemia regresa o si, como

señalan algunos investigadores, hasta que no tengamos una vacuna o tratamiento eficiente, tendremos que hacer aislamiento social intermitente, el "quédate en casa" no puede ser la opción. Las tecnologías disponibles en este momento permiten, como se demostró en el sudeste asiático, otro tipo de política y comportamiento social que redunde en un mejor equilibrio entre la salud y la economía. Yendo más allá de estas posibilidades de medio plazo, es posible resaltar las ventajas que estas tecnologías ofrecen para, después de identificar a los sujetos que han desarrollado inmunidad a la enfermedad, permitir una movilidad sin restricciones de estas personas. Hecho beneficioso éste tanto para la economía como para la expansión de la pandemia. Es decir, no solo deberíamos mirar estas tecnologías como limitadoras y controladoras de nuestros movimientos (que, ciertamente, pueden serlo) sino también como ventanas de oportunidad para precisamente lo contrario: generar espacios de libertad para enfrentarnos a la pandemia.

Mientras, con razón, estamos pendientes de la evolución diaria de la pandemia no podemos eludir el siempre eterno debate entre las funciones y acciones que deben repartirse entre estado y el mercado, madre esta cuestión de casi todos los debates imaginables en economía. Alinear los intereses y objetivos del sector privado y el sector público en esta pandemia será una tarea ingente de cuyo alcance el desarrollo y la salida de esta crisis va a depender profundamente.



getem